

## **Declaración del Grupo de Santa Fe sobre Reparaciones y Desarrollo Acerca de Chixoy**

El Grupo de Santa Fe sobre Reparaciones y Desarrollo esta compuesto por especialistas de la sociedad civil, ciencia y derechos humanos con décadas de experiencia sobre programas de reasentamiento. La siguiente declaración fue promulgada en Santa Fé, Nuevo México, EE.UU. el 10 de noviembre del 2004 con respecto al legado de violencia, penurias, y el empobrecimiento asociado con el Proyecto Hidroeléctrico de Chixoy.

La experiencia global demuestra que las provisiones fundamentales para que se realice un programa de reasentamiento exitoso deben incluir:

- Adquisición legal de la tierra a ser expropiada y completa compensación.
- Provisión de la oportunidad de reconstruir formas de vida viable para las personas afectadas.
- Diseño de un plan viable de reasentamiento y un presupuesto acordado con el consentimiento de las personas afectadas.
- Supervisión de la ejecución del plan tanto por las agencias financiadoras como las implementadoras.
- Acciones correctivas cuándo y dónde se identifiquen obstáculos en la ejecución del plan en consulta con las comunidades.

En el caso del Proyecto Hidroeléctrico de Chixoy en Guatemala, los acuerdos legales son inadecuados con respecto a considerar las provisiones delineadas anteriormente. Sin embargo, los acuerdos obligaban al Gobierno de Guatemala, al Instituto Nacional de Energía (INDE), el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial (BIRD) a realizar la adquisición legal de las tierras y a reemplazar las viviendas y los servicios públicos (Loan Number 1605 GU, Loan Agreement, Chixoy Power Project, Dated July 21, 1978). Estas obligaciones fueron inscritas en acuerdos legales que tienen el estatus de ley internacional y que por ende obligan al Gobierno de Guatemala aun en periodo de régimen militar. Nuestra revisión de la evidencia documentada en estudios que se extienden a lo largo de 20 años resulta en los siguientes hallazgos:

- Los requisitos para la realización del reasentamiento del proyecto fueron inadecuadamente tratados en los documentos de los préstamos iniciales del BID y del BIRD, el cual hace referencia a un informe de un consultor sin un presupuesto acordado.
- La adquisición de tierra para la construcción del proyecto no fue llevada a cabo en toda su totalidad y continua aun incompleta. No se realizo un esfuerzo real (aceptable para las personas afectadas) para restaurar el modo de vida de las personas afectadas, violando así los propios acuerdos legales de los bancos. El BIRD y el BID fueron informados en 1984 del fracasado proceso de reasentamiento y de los riesgos del

empobrecimiento de las gentes, pero los bancos fallaron al no corregir la situación cuando se les dio la oportunidad a través de la negociación del segundo préstamo, violando así una de las políticas del BIRD. Este hecho aumenta la culpabilidad institucional por inducir el empobrecimiento de las gentes.

- Las personas afectadas por el proyecto no fueron sistemáticamente consultadas, a pesar de sus repetidas protestas y peticiones solicitando esto a las autoridades y a los bancos.
- El BIRD y el BID procedieron a desembolsar fondos y a negociar un nuevo préstamo sin tomar en consideración la intensificación de la violencia que estaba perjudicando a las personas afectadas.
- Los bancos no respondieron con acciones razonables y responsables cuando en 1996 se estableció con firme evidencia el profundo empobrecimiento de las personas afectadas, de la falla del INDE para corregir en buena fe los errores cometidos anteriormente, y de la violación del BIRD de sus propias políticas. Al contrario, el BIRD y el BID fallaron al no involucrar a las personas afectadas en la planeación de acciones correctivas culturalmente adecuadas y comprensivas.

Concluimos que las personas afectadas por la Represa de Chixoy tienen una demanda contundente y justa de restitución y motivos para buscar las reparaciones legalmente. El proceso de negociación concerniente a las reparaciones y el desarrollo ha sido iniciado. Damos la bienvenida a este acontecimiento y urgimos a todas las partes para que honren sus obligaciones al participar. Queremos advertir cautela en contra de cualquier proceso que se encamine al cierre prematuro de las negociaciones, puesto que estos son asuntos complejos, los actores numerosos, y el proceso incompleto.

Sugerimos que

- El primero paso en el proceso de la negociación debe ser el de alocar financiamiento externo para el proceso de llegar a un acuerdo sobre las reglas de las negociaciones.
- Este financiamiento debe estar incluido en los costos de la participación en el primer año de negociaciones de parte del Gobierno de Guatemala, BID, BIRD y costos de las personas afectadas.
- Este financiamiento no debe imponer más dificultades en las personas afectadas.
- Los fondos para financiar las negociaciones deben hacerse disponibles del Fondo Rural de Electrificación o activos comparables acordados por el Gobierno de Guatemala, BIRD, IDB e INDE.
- Simultáneamente con el trabajo para acordar las reglas de las negociaciones, todas las partes involucradas deben tratar las necesidades urgentes (e.g. agua potable, electricidad y alimentación y salud adecuada) en el interés de las consideraciones humanitarias.

Es así que urgimos a todas las partes a convenir y escribir los términos de referencia para guiar el proceso de negociaciones, incluyendo la estructura, logística y reglas de las negociaciones permitiendo las consultas continuas entre los representantes de las personas afectadas, sus autoridades indígenas, y sus comunidades en general.

Firmas:

Linda M. Whiteford  
Professor of Anthropology, University of South Florida  
President, Society for Applied Anthropology  
Statement endorsed by the Society for Applied Anthropology Executive Board

Stephen A. Hansen  
Science & Human Rights Program Project Manager, American Association for the Advancement of Science. Statement endorsed by the Science and Human Rights Program of the American Association for the Advancement of Science

Thayer Scudder  
Emeritus Professor of Anthropology, California Institute of Technology  
Former Commissioner, World Commission on Dams

William L. Partridge  
Professor of Human & Organizational Development and Professor of Anthropology, Vanderbilt University  
Former Lead Anthropologist, Latin America and Caribbean Region, World Bank

Ruth M. Krulfeld  
Professor Emeritus of Anthropology and International Affairs, The George Washington University  
Member of The Committee on Scientific Freedom and Responsibility and Human Rights of the American Association for the Advancement of Science

Barbara Rose Johnston  
Senior Research Fellow, Center for Political Ecology, Santa Cruz, California  
Emeritus Chair, American Anthropological Association Committee for Human Rights.

Nicholas Hildyard  
Director, The Cornerhouse, United Kingdom

Carmen Garcia-Downing  
Research/Indigenous Affairs Specialist, Rural Health Office, University of Arizona

The Honorable Ted Downing  
Representative, Arizona House of Representatives. Research Professor,  
University of Arizona.  
President Emeritus, Society for Applied Anthropology.

Monti Aguirre  
Latin America Program, International Rivers Network, Berkeley, California

### Santa Fe Group on Reparations and Development Statement on Chixoy

The Santa Fe Group on Reparations and Development is composed of civil society, scientific and human rights specialists with decades of experience with resettlement programs. The following statement was promulgated in Santa Fe, New Mexico on November 10, 2004 with respect to legacy issues arising from the violence, the hardships, and the impoverishment associated with the Chixoy Hydroelectric Project.

Global experience demonstrates that the fundamental provisions to enable successful resettlement programs must include:

- Legal acquisition of land to be expropriated and compensation in full.
- Provision of opportunity to build viable livelihoods for the affected people.
- Design of a viable resettlement plan and an agreed budget with the consent of the affected people.
- Supervision of the execution of the plan by both the financing and implementing agencies.
- Corrective action where and when obstacles are identified in the execution of the plan, in consultation with the communities.

In the case of Chixoy Hydroelectric Project in Guatemala, the legal agreements were inadequate to address the provisions above. Nonetheless, the agreements obligate the Government of Guatemala (GoG), the Instituto Nacional de Electrificación (INDE), the Inter-American Development Bank (IBD) and the World Bank (IBRD) to legally acquire land and to replace housing and public services (Loan Number 1605 GU, Loan Agreement, Chixoy Power Project, Dated July 21, 1978). These obligations are written into legal agreements that have the status of international law and which therefore were binding on the GoG even during the period of military rule.

Our review of evidence documented in studies spanning 20 years results in

the following findings.

- Resettlement requirements of the project were inadequately addressed in initial loan documents of IDB and IBRD, which reference a consultant's report with no agreed budget.
- Land acquisition for project construction was not completed and is still incomplete. No realistic (acceptable to the affected people) effort was made to restore the livelihoods of affected people in violation of the Banks own legal agreements.
- The IBRD and INDE were informed in 1984 of the failed resettlement process and the risks of impoverishment of the people, but failed to correct the situation when provided the opportunity via the second loan negotiations, representing a violation of IBRD policies. This gives rise to institutional culpability for inducing impoverishment.
- Project affected people were not systematically consulted, despite their repeated protests and petitions requesting such to the authorities and the Banks.
- IBRD and IDB continued to disburse funds and negotiated a new loan without taking into consideration the escalating violence harming project-affected people.
- The Banks did not take reasonable and responsible actions when in 1996 firm evidence was established of deepening impoverishment of the affected people, of INDE's failure to correct prior errors in good faith, and of IBRD'S violation of its own policies. Instead, the IBRD and IDB responded in a way that failed to engage the affected people in planning culturally adequate and comprehensive corrective plans.

We conclude that the people affected by the Chixoy Dam have a strong and just claim for restitution and grounds to seek legal redress. The negotiation process concerning reparations and development has been initiated. We welcome this development and urge all parties to honor their obligations by participating. We would caution against any process that leads to premature closure. This is because the issues are complex, the actors numerous, and the process incomplete.

We suggest that:

- The first step in the negotiation process should be to allocate external financing for the process of reaching agreement on the rules of the negotiations.
- This financing should include the costs of participation in the first year of negotiations on the part of GoG, IDB, IBRD and costs on the affected people.
- This financing should not impose further hardship to the affected people.
- Funds to finance the negotiations should be available from the Rural Electrification Trust Fund or comparable assets agreed upon by GoG, IBRD, IDB and INDE.
- Simultaneous with the work to agree on the rules of the negotiations, all parties involved should address the urgent needs (e.g. potable water,

electricity and adequate food and health care) in the interest of humanitarian consideration.

We therefore urge the stakeholders to convene and write terms of reference to guide the negotiations process, including structure, logistics and rules of the negotiations that permit continuous consultations among representatives of affected people, their indigenous authorities, and their wider communities.

Signed,

Linda M. Whiteford  
Professor of Anthropology, University of South Florida  
President, Society for Applied Anthropology  
Statement endorsed by the Society for Applied Anthropology Executive Board

Stephen A. Hansen  
Science & Human Rights Program Project Manager, American Association for the Advancement of Science. Statement endorsed by the Science and Human Rights Program of the American Association for the Advancement of Science

Thayer Scudder  
Emeritus Professor of Anthropology, California Institute of Technology  
Former Commissioner, World Commission on Dams

William L. Partridge  
Professor of Human & Organizational Development and Professor of Anthropology, Vanderbilt University  
Former Lead Anthropologist, Latin America and Caribbean Region, World Bank

Ruth M. Krulfeld  
Professor Emeritus of Anthropology and International Affairs, The George Washington University  
Member of The Committee on Scientific Freedom and Responsibility and Human Rights of the American Association for the Advancement of Science

Barbara Rose Johnston  
Senior Research Fellow, Center for Political Ecology, Santa Cruz, California  
Emeritus Chair, American Anthropological Association Committee for Human Rights.

Nicholas Hildyard  
Director, The Cornerhouse, United Kingdom

Carmen Garcia-Downing  
Research/Indigenous Affairs Specialist, Rural Health Office, University of Arizona

The Honorable Ted Downing  
Representative, Arizona House of Representatives. Research Professor,  
University of Arizona.  
President Emeritus, Society for Applied Anthropology.

Monti Aguirre  
Latin America Program, International Rivers Network, Berkeley, California

^^

Monti Aguirre  
Latin American Campaigns  
International Rivers Network

^^

Monti Aguirre  
Latin American Campaigns  
International Rivers Network